

En el período comprendido entre julio de 1994 y marzo de 1996 ocurrieron varios hechos que matizaron las conflictivas relaciones Cuba-Estados Unidos, sin que por ello cambiaran su esencia.

La llamada crisis de los balseros del verano de 1994 elevó considerablemente el nivel de confrontación entre ambos países pero a la vez marcó un hito en el inicio de un proceso de redefinición de los mecanismos migratorios utilizados por los Estados Unidos en su política hacia Cuba. La crisis llevó a la Administración Clinton a modificar la política que desde la década de 1960 se aplicaba los inmigrantes ilegales cubanos.

Buscando solucionar la crisis, ambos gobiernos acudieron a la mesa de negociaciones migratorias con voluntad política y pragmatismo, cuyo resultado fueron los acuerdos migratorios suscritos el 9 de septiembre de 1994 y el 2 de mayo de 1995. Con esto no se resolvían todos los problemas en el tema migratorio, pero al menos posibilitó en cierta medida despolitizar la relación migratoria entre las dos naciones y que los Estados Unidos, por primera vez desde 1960, dieran igual tratamiento migratorio a Cuba que al resto de los países.

A partir de este resultado, dentro de los Estados Unidos se hizo cada vez más evidente el debate sobre cuál debía ser la política hacia Cuba. Importantes medios de prensa se pronuncian, con una visión práctica, por un cambio que conduzca, al menos, a posibilitar un mayor acercamiento al pueblo cubano y al levantamiento gradual del bloqueo por fases y en correspondencia a determinadas concesiones políticas que Cuba haga. Dentro de esta tendencia se encuentra el llamado Carril II de la Ley para la Democracia en Cuba de 1992 (Ley Torricelli), que en esencia plantea subvertir la sociedad cubana desde dentro promoviendo “más activamente la democracia y el libre flujo de ideas” pero sin abandonar la presión económica del bloqueo.

En el otro extremo del debate está la derecha cubano-americana encabezada por la Fundación Nacional Cubano Americana y el Congreso dominado por los republicanos conservadores que se oponen al más mínimo acercamiento al Gobierno cubano. Y dentro de esta tendencia ultraderechista está la Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubanas de 1996 –conocida como la Ley Helms-Burton por el apellido de sus autores, el senador republicano Jesse Helms y el representante republicano Dan Burton--, que pretende ahogar económicamente a Cuba a través del recrudecimiento e internacionalización del bloqueo, y que fuera sancionada por el Presidente William Clinton el 12 de marzo de 1996.

Dentro de Cuba también está a debate la redefinición de los mecanismos para hacer frente al reto que presuponen el Carril II de la Ley Torricelli y la Ley Helms-Burton, pero sin que se abandone la esencia de la política mantenida por la Revolución frente a los Estados Unidos desde sus inicios, es decir, resistir y mantener la independencia y soberanía nacional.

Como hecho relevante en este lapso, se inscribe la visita del Presidente Fidel Castro a Nueva York para participar en el aniversario 50 de las Naciones Unidas, que puso de manifiesto muy claramente las contradicciones que existen en sectores estadounidenses en relación con Cuba, pues en tanto el Gobierno norteamericano lo excluyó de las actividades oficiales que como país anfitrión programó, en esta ocasión no sólo recibió una vez más el respaldo solidario de sectores populares, sino también influyentes hombres de negocios y conformadores de opinión pública le dispensaron un trato cordial.

A continuación se presenta una apretada síntesis cronológica de estos hechos que ayudará a entender los aspectos que aquí se describen.